



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

www.cef.es

info@cef.es

Índice Tema 2

1. Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
 - 1.1. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
 - 1.1.1. Estructura.
 - 1.1.2. Elección de Diputados y Senadores.
 - 1.1.3. El estatus de los Diputados y Senadores.
 - 1.2. Funciones de las Cortes.
 - 1.2.1. Funciones legislativas.
 - 1.2.2. Función financiera.
 - 1.2.3. Función de control.
 - 1.2.4. Otras funciones.
 - 1.3. El funcionamiento de las Cortes.
 - 1.3.1. El Pleno.
 - 1.3.2. Las Comisiones.
 - 1.3.3. Diputación Permanente.
 - 1.3.4. Grupos parlamentarios.
 - 1.3.5. Junta de Portavoces.
 - 1.4. Las sesiones y el régimen de actuación de las Cámaras.
 - 1.4.1. Régimen de actuación del Congreso.
 - 1.4.2. Régimen de actuación del Senado.
 - 1.4.3. Relaciones entre ambas Cámaras.
 - 1.5. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración de las leyes.

2. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones.

2.1. Concepto, composición y organización interna.

2.1.1. Composición.

2.1.2. Mandato.

2.1.3. Incompatibilidades.

2.1.4. Responsabilidad.

2.1.5. Organización interna.

2.2. Competencias del Tribunal Constitucional según la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. El Defensor del Pueblo.

3.1. Designación.

3.2. Cese.



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

www.cef.es

info@cef.es

TEMA 2

Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

1. LAS CORTES GENERALES. ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO.

Las Cortes Generales, dice el artículo 66 de la Constitución, representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables.

Siguiendo a Sánchez Agesta se pueden señalar los siguientes caracteres:

- a) Son el órgano típicamente representativo del pueblo español, a través del cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de representantes. Aunque participan de la soberanía, ésta no reside en ellas sino en el pueblo español (art. 1.º 2).
- b) Las Cortes son un órgano de poder político. Son uno de los poderes del Estado a que se refiere el artículo 1.º 2 de la Constitución. Y en la terminología clásica son el poder legislativo, que goza de independencia frente a los otros poderes, si bien mantiene relaciones de colaboración e interacción. Esta independencia se declara expresamente frente a injerencias extrañas estableciendo su inviolabilidad. Son, además, un poder político en el sentido de que sólo están limitadas por la Constitución, siendo un factor relevante en la adopción de decisiones políticas.
- c) Son un órgano deliberante: sus decisiones se llevan a cabo a través de un proceso de discusión en el que participan miembros de las diversas tendencias dando un grado de mayor racionalidad a sus acuerdos.
- d) Su estructura es bicameral.
- e) Son un órgano de acción continuada que ejerce sus funciones incluso durante las vacaciones parlamentarias o en los supuestos de disolución o extinción del mandato, a través de la Diputación permanente.
- f) Las Cortes son un poder legislativo, es decir, creadoras de Derecho, de normas superiores a cualquier otra, que no podrán ser enjuiciadas sino por el Tribunal Constitucional.



1.1. ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO.

1.1.1. Estructura.

Las Cortes Generales se componen de dos Cámaras: el Congreso de Diputados y el Senado.

1.1.1.1. El Congreso.

Es el órgano político por excelencia que canaliza la representación del pueblo español, realizando con carácter casi exclusivo la función política en que se hace efectiva la relación de confianza en que se apoya el Gobierno y es además el principal órgano en la elaboración de las leyes, sin perjuicio de la participación del Senado, la cual, como se verá en el tema siguiente, tiene un carácter subordinado.

Lo integran un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por circunscripciones electorales en que se constituyen cada una de las provincias además de las ciudades de Ceuta y Melilla (después de aprobada la Constitución, la Ley Orgánica 5/1985, ha fijado el número de Diputados en 350).

El número de representantes por cada provincia los fija la Ley Electoral asegurando un mínimo en cada una de ellas y distribuyendo los demás en proporción a la población. Ceuta y Melilla tendrán un representante cada una de ellas. La asignación de escaños se ha hecho de conformidad con los artículos 161 a 166 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, siguiendo el sistema D'Hondt, que se describe posteriormente.

El Congreso es elegido por cuatro años. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. Y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

También termina el mandato por disolución de la Cámara a propuesta del Presidente del Gobierno, o por no haber obtenido en el plazo de dos meses el voto de confianza los candidatos propuestos por el Rey después de unas elecciones o de la negación de un voto de confianza al Gobierno (arts. 99 y 115).

El Reglamento del Congreso de los Diputados es de 10 de febrero de 1982.

1.1.1.2. El Senado.

Al que la Constitución da un carácter de representatividad territorial de ámbito provincial. Cada provincia elegirá a cuatro Senadores. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla elegirán dos Senadores cada una de ellas.

Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa, o en su defecto, al órgano superior colegiado de la Comunidad Autónoma, según sus Estatutos.

El mandato es también de cuatro años y la disolución puede ser conjunta o separadamente de la del Congreso, salvo en el supuesto de disolución por no haber elegido Presidente en el plazo de dos meses después de unas elecciones o haber negado la confianza el Congreso al Gobierno (arts. 99 y 115), supuesto en que, necesariamente, la disolución afecta a ambas Cámaras.

El Reglamento del Senado es un texto refundido aprobado el 3 de mayo de 1994.

1.1.2. Elección de Diputados y Senadores.

1.1.2.1. Principios generales.

Las Cortes Generales se hallan integradas por los miembros del Congreso (Diputados) y los del Senado (Senadores) elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y no ligados por mandato imperativo.

Son elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos y no concurra en ellos una causa de inelegibilidad a determinar por la Ley Electoral.

La Constitución, en todo caso, establece como inelegibles:

- A los componentes del Tribunal Constitucional.
- A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- Al Defensor del Pueblo.
- A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- A los miembros de las Juntas Electorales.

La Ley Orgánica 5/1985 establece además la inelegibilidad de los titulares de determinados cargos en sus artículos 6 -en el que regula las causas de inelegibilidad- y 155 -sobre la incompatibilidad-.

Los miembros de las Cortes no pueden serlo simultáneamente de las dos Cámaras, ni del Congreso y una Asamblea de la Comunidad Autónoma, pero sí del Senado y de una de esas Asambleas.

1.1.2.2. Sistema de elección.

La Constitución únicamente establece que Diputados y Senadores serán elegidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, reservando a una ley orgánica el desarrollo y fijación del régimen electoral general. Dicha ley orgánica es la Ley 5/1985, sobre Régimen Electoral General, que regula en sus artículos 161 y 166 el sistema electoral. La supracitada norma establece para la elección de Diputados un régimen proporcional corregido que favorece a los partidos mayoritarios y que se conoce con el nombre de su inventor, el matemático belga D'Hondt. Para la elección de Senadores se sigue por el contrario un sistema mayoritario.

Concretamente el sistema regulado por la Ley Orgánica 5/1985 estaba contemplado ya en el Real Decreto-Ley de 1977 que queda derogado por la disposición derogatoria del precitado texto normativo.

A) ELECCIÓN DE DIPUTADOS.

Una vez determinado el número de escaños de Diputados que corresponde a cada distrito electoral (que como regla general y salvo las excepciones que vimos en el epígrafe 2 coincide con la provin-

cia), siguiendo el sistema que en dicho epígrafe 2 se señalaba, el sistema de distribución de dichos escaños es el siguiente:

1. El sistema de candidatura será el de listas cerradas que habrán de incluir como mínimo tantos candidatos como puestos hayan de cubrirse.

Pueden presentar candidaturas los partidos y coaliciones de partidos legalmente constituidos (conforme a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos).

2. Cada uno de los electores de un distrito sólo podrá dar su voto a una sola lista, sin introducir en ella modificación alguna ni alterar en la misma el orden de colocación de los candidatos.
3. Se efectuará el recuento de votos obtenido por cada lista en el distrito, ordenándose en una columna las cantidades respectivas de mayor a menor.
4. No serán tenidas en cuenta aquellas listas que no hubiesen obtenido, por lo menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en el distrito.
5. Se dividirá el total de votos obtenidos por cada lista por 1, 2, 3, etc., hasta un número igual al de escaños correspondientes al distrito, formándose el cuadro que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuirán a las listas a las que correspondan en el cuadro los mayores cocientes, procediéndose a esa atribución por orden decreciente de éstos.

Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en un distrito que elija ocho Diputados.

Votación repartida entre 5 listas:

A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000)

DIVISIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
A	1.º 168.000	3.º 84.000	6.º 56.000	8.º 42.000				
B	2.º 104.000	7.º 52.000						
C	4.º 72.000							
D	5.º 64.000							
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000

Por consiguiente, la lista A obtiene cuatro escaños, la lista B dos escaños y las listas C y D un escaño cada una.

Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas listas, el escaño se atribuirá a la lista que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos listas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos en forma alternativa.

Determinado el número de escaños que corresponde a cada lista, serán adjudicados a los candidatos incluidos en la misma por el orden de colocación en que aparezcan.

B) ELECCIÓN DE SENADORES.

Según lo dispuesto en el artículo 166 de la ya citada Ley Orgánica 5/1985, la elección directa de los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla, se rige por lo dispuesto en los apartados siguientes:

- a) Los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla y uno en las restantes circunscripciones insulares.
- b) Serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.

1.1.3. El estatus de los Diputados y Senadores.

Señaladas ya las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, es preciso referirse en este epígrafe al carácter de la representación de Diputados y Senadores, así como a sus derechos y privilegios.

En cuanto a la primera cuestión hay que señalar que los miembros de las Cortes Generales no deben estar ligados por mandato imperativo (art. 67.2). Su mandato, pues, es representativo. Los parlamentarios no deben recibir instrucciones vinculantes de los electores que los han elegido. Como es notorio, se trata aquí de un antiguo principio del Estado liberal, que la existencia de los partidos políticos y la misma democracia liberal ha puesto en crisis, ya que resulta contradictorio con la disciplina de partido y con el carácter de clase o regional de algunos importantes partidos.

En cuanto a los derechos y privilegios de Diputados y Senadores los principales son los siguientes:

- Inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71), lo que significa la imposibilidad de ser perseguido, detenido o juzgado por razón de las opiniones o de los votos emitidos en la Cámara o sus Comisiones.
- Inmunidad durante el período de su mandato, lo que significa la imposibilidad de ser detenido o procesado por actos realizados al margen de sus funciones. La detención sólo se permite en caso de flagrante delito. Y para ser inculcado o procesado se necesitará autorización previa de la respectiva Cámara. Es lo que los Reglamentos denominan suplicatorios.
- Remuneración: Diputados y Senadores percibirán una asignación económica que será fijada por la respectiva Cámara al aprobar su presupuesto.
- Fuero especial en materia criminal, de modo que en las causas contra Diputados y Senadores la competencia corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Estos privilegios y derechos se recogen en el artículo 71 y su significado no es personal, sino funcional, de manera que, para no quebrar el principio de igualdad ante la ley en una democracia, garantizan la independencia y la eficacia en el ejercicio del cargo de Diputado o Senador, de aquí, por ejemplo, que la inviolabilidad no se extienda a los actos de los parlamentarios ajenos al cumplimiento de su función, así como que la inmunidad o la aforación se contraigan al período de su mandato.

1.2. FUNCIONES DE LAS CORTES.

Podemos sintetizar las funciones de las Cortes en legislativas, ejecutivas y de control, existiendo, asimismo, otras funciones diversas que enumeraremos en el último apartado de esta pregunta.

1.2.1. Funciones legislativas.

Señala Sánchez Agesta que conforme a nuestra Constitución la ley no es cualquier acto de las Cortes, sino aquel acto que se traduce en reglas imperativas de un carácter general y racional que establecen y garantizan la igualdad y los derechos de ciudadanos.

No hay en la Constitución (aunque la hubo en el proyecto) una definición de competencia limitativa por razón de materia de esa potestad legislativa (reserva reglamentaria). El principio tiene que ser, pues, atribuir a esa potestad legislativa una presunción general de competencia sobre toda materia, que exija ser regulada por una norma general que respete el principio de igualdad y que no implique una reforma de la Constitución, ya que esta potestad legislativa tiene sus límites en la propia Constitución.

La ley, dentro de este límite que le marca la Constitución, es la primera y más general de las fuentes del Derecho.

El desarrollo de esta función legislativa de las Cortes comprende:

1. Iniciativa legislativa que las Cortes comparten con el Gobierno, con las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y con los ciudadanos (en número no inferior a 500.000).
2. Tramitación de los proyectos y proposiciones legislativas, cuestión esta que será estudiada detenidamente en el siguiente epígrafe al estudiar el funcionamiento de las Cámaras.
3. Aprobación de las leyes.
4. Delegación legislativa, autorizando al Gobierno a dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a la ley orgánica (arts. 82 a 85).
5. Convalidación o derogación de Decretos-leyes adoptados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, los cuales no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86).
6. Control de la regularidad de la sanción y promulgación reales de las leyes aprobadas por las Cortes, así como de la orden de su inmediata publicación, en virtud de la responsabilidad que asume en aplicación del artículo 64.2 el órgano refrendante.

Hay que señalar por último en relación con la función legislativa de las Cortes, el recorte que se producirá en la extensión de la misma, a medida que las Comunidades Autónomas vayan asumiendo las correspondientes funciones legislativas sobre las materias en que la Constitución lo permite.

1.2.2. Función financiera.

Dentro de esta función corresponde a las Cortes:

1. Aprobación de los Presupuestos del Estado, potestad atribuida a las Cortes Generales por el artículo 66, y desarrollada en el artículo 134 de la Constitución.

La elaboración del Presupuesto corresponde al Gobierno, así como la remisión a las Cortes de proyectos de ley que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos en relación con el Presupuesto aprobado.

2. Planificación, mediante ley, de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1).
3. Ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica, reservando al sector público, mediante ley, recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordando la intervención de empresas cuando lo exigiere el interés general (art. 128.2).
4. Ejercicio de la potestad originaria para establecer tributos mediante ley y, por norma del mismo rango, determinación de todo beneficio fiscal (art. 133).
5. Autorización al Gobierno para emitir Deuda Pública o contraer crédito (art. 135).
6. Control de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público a realizar por el Tribunal de Cuentas, que depende directamente de las Cortes Generales, y que ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y aprobación de la Cuenta General del Estado, acerca de la cual remitirá a las Cortes un informe anual.

1.2.3. Función de control.

A través de la actividad de control las Cortes llevan una inspección de crítica y censura de las actividades del Gobierno, a la vez que participan en la misma.

Sus manifestaciones típicas son:

- a) La facultad de las Cámaras o sus Comisiones a exigir información del Gobierno (arts. 109 y 110).
- b) La facultad de los parlamentarios de hacer preguntas al Gobierno o sus Ministros (art. 111).
- c) La posibilidad de formular interpelaciones que pueden dar lugar a mociones (art. 111).
- d) El Congreso ha de otorgar la confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno (arts. 99 y 114).
- e) La facultad de una décima parte de los miembros del Congreso de presentar una moción de censura para exigir la responsabilidad del Gobierno (arts. 113 y 114).
- f) Aprobar o rechazar la cuestión de confianza (art. 112).

- g) Declarar los estados de excepción y sitio (art. 116).
- h) Autorización para la celebración de tratados internacionales en los supuestos previstos en los artículos 93 y 94.

1.2.4. Otras funciones.

1. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de cuatro personas cada Cámara para ser designadas miembros del Tribunal Constitucional (art. 159.1).
2. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de ocho personas para ser designadas miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122.3).
3. Provisión a la sucesión en la Corona (art. 57.3) y exclusión en la sucesión (núm. 4 del mismo artículo), inhabilitación del Rey (art. 59.2), designación de la Regencia (art. 59.3), nombramiento de tutor del Rey menor (art. 60.1) y proclamación del Rey (art. 61.1).
4. Designación del Defensor del Pueblo (art. 54).
5. Autorización del referéndum consultivo de todos los ciudadanos sobre decisiones políticas de especial transcendencia, el cual se convoca por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno con la autorización expresa de las Cortes Generales (art. 92).
6. Autorización de la declaración de guerra y conclusión de la paz (art. 63.3).

1.3. EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTES.

Cada una de las Cámaras tiene su propia organización determinada por la Constitución y sus respectivos Reglamentos. Funcionan en Pleno y en Comisiones.

1.3.1. El Pleno.

Será convocado por el Presidente de la Cámara:

- a) Por propia iniciativa.
- b) A petición, como mínimo, de dos Grupos Parlamentarios.
- c) A petición de una quinta parte de los miembros de la Cámara.

Como órganos del Pleno se deben señalar:

- A) La Mesa. Órgano rector de la Cámara que actúa bajo la autoridad y dirección del Presidente, ostenta la representación de la Cámara en los actos a que concurre.

Está constituida por el Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios, correspondiendo al primero dirigir y coordinar su actividad. Dichos miembros son elegidos por el Pleno de las Cámaras, en la sesión constitutiva de éstas.

B) El Presidente, elegido por la propia Cámara y a quien le corresponde el ejercicio de todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes, la convoca (una vez ya constituida), fija el orden del día con la Junta de Portavoces, asegura la buena marcha de sus trabajos y dirige las deliberaciones haciendo cumplir el Reglamento.

Como facultad del Presidente del Congreso, ha de señalarse la de presidir las reuniones conjuntas de Congreso y Senado cuando éstas hayan de tener lugar, refrendar los Decretos, disolviendo las Cortes Generales en el supuesto de no haber elegido Presidente de Gobierno en el plazo de dos meses después de unas nuevas elecciones o de haber dimitido el Presidente del Gobierno por haberle negado el voto de confianza, y refrendar los actos del Rey proponiendo Presidente del Gobierno.

C) Los Vicepresidentes, que sustituyen al Presidente.

D) Las Secretarías, órganos fedatarios que expiden certificaciones y tramitan notificaciones y comunicaciones.

1.3.2. Las Comisiones.

Son grupos de trabajo integrados por un número reducido de parlamentarios pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios.

Pueden ser de carácter permanente, especiales o de encuesta (art. 28 del Reglamento del Congreso).

- Son permanentes: la de Competencia Legislativa, de Incompatibilidades, Gobierno e Interior, Suplicatorios y de Reglamento (generales en el Senado); y la de Urgencia legislativa (sólo en el Congreso) y la de Peticiones (sólo en el Senado); además una por cada Departamento Ministerial en cada Cámara y la de Presupuesto (arts. 36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento del Congreso).
- Especiales, que se constituyen para un caso específico (art. 44 del Reglamento del Congreso).
- De encuesta, para llevar a cabo una investigación (art. 76 de la CE).

Cada Comisión elige una Mesa integrada por el Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.

1.3.3. Diputación Permanente.

En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los Grupos Parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la de pedir la convocatoria de la Cámara en sesión extraordinaria sobre un orden del día determinado, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116 de la Constitución, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.

Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes, seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados será convocada por su Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de aquélla.

La Diputación Permanente del Senado se reunirá siempre que su Presidente lo considere oportuno y, necesariamente, en los siguientes casos:

- a) El día antes de celebrarse Junta Preparatoria.
- b) Cuando lo solicite el Gobierno.
- c) Cuando lo pida una cuarta parte, al menos, de sus miembros.

1.3.4. Grupos Parlamentarios.

Reúnen a los miembros de la Cámara del mismo partido o de tendencias afines. Se exige un mínimo de miembros para constituir un Grupo. Cada Grupo tiene un portavoz. Todos los portavoces constituyen la Junta de Portavoces y junto con el Presidente de la Cámara fijan el orden del día.

1.3.4.1. Los Grupos Parlamentarios del Congreso.

Los Diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. También los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho número, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por 100 de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 por 100 de los emitidos en el conjunto de la nación.

La constitución de los Grupos Parlamentarios se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión constitutiva del Congreso, y los Diputados que no queden integrados en un Grupo Parlamentario pasarán a formar el Grupo Mixto.

1.3.4.2. Grupos Parlamentarios y Grupos Territoriales en el Senado.

Cada Grupo Parlamentario estará compuesto, al menos, por 10 Senadores, integrándose en el Grupo Mixto los que no se incorporen a un Grupo Parlamentario.

La formación de Grupos Parlamentarios se hará en el plazo de cinco días hábiles contados desde la constitución del Senado.

Una particularidad que se da en la Cámara Alta es la de que dentro de los Grupos Parlamentarios que se compongan de Senadores elegidos en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, o por las Asambleas Legislativas de las mismas, podrán constituirse en Grupos Territoriales, integrados cada uno de ellos, como mínimo, por tres Senadores.

1.3.5. Junta de Portavoces.

Está constituida por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Se reunirá bajo la presidencia del Presidente del Congreso o del Senado, que la convocará:

- a) Por iniciativa propia.
- b) A petición de dos Grupos Parlamentarios.
- c) A petición de la quinta parte de los miembros de las Cámaras.

De sus reuniones se dará cuenta al Gobierno para que envíe, si lo estima oportuno, un representante.

Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado.

1.4. LAS SESIONES Y EL RÉGIMEN DE ACTUACIÓN DE LAS CÁMARAS.

Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio (art. 73.1).

Las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de ellas. Deben convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado (art. 73.2).

1.4.1. Régimen de actuación del Congreso.

El orden del día del Pleno del Congreso será fijado por el Presidente de acuerdo con la Junta de Portavoces. El de las Comisiones se fijará por su respectiva Mesa, de acuerdo con el Presidente del Congreso, teniendo en cuenta el calendario fijado por la Mesa del Congreso.

Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

Para que los acuerdos sean válidos habrán de ser aprobados por mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución, leyes orgánicas o el Reglamento del Congreso.

1.4.2. Régimen de actuación del Senado.

El orden del día del Pleno será fijado por el Presidente del Senado de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces. El representante del Gobierno podrá incluir un solo asunto con carácter prioritario.

Para adoptar acuerdos la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

Sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las Leyes Orgánicas, y las que para la elección de personas se dispone en el Reglamento del Senado, los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de Senadores presentes, siempre que lo esté la mitad más uno de los miembros del órgano de que se trate.

El orden del día de las Comisiones será fijado por su Presidente, oída la Mesa respectiva y teniendo en cuenta, en su caso, el programa de trabajos de la Cámara. Un tercio de los miembros de la Comisión podrá incluir un solo asunto con carácter prioritario.

1.4.3. Relaciones entre ambas Cámaras.

Aludiremos finalmente a las sesiones conjuntas de ambas Cámaras, a que se refiere el artículo 74 de la Constitución.

De acuerdo con el apartado 1 de dicho artículo:

«Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales».

Además puede reunirse una Comisión mixta Congreso-Senado, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 74 para adoptar algunas decisiones expresamente establecidas en la Constitución; estas decisiones son:

- Autorización para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados (art. 94.1).
- Autorización para acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas (art. 145.2).
- Distribución de recursos del Fondo de Compensación Interterritorial entre las Comunidades Autónomas (art. 158.2).

1.5. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES.

Las leyes son las normas aprobadas por las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el Rey y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Como ya apuntamos en otro momento, el «Poder Legislativo» reside en las Cortes Generales, lo que dicho con otros términos significa que son el órgano encargado de elaborar las leyes.

La iniciativa legislativa puede ser ejercida por:

- a) El Gobierno.
- b) El Congreso.
- c) El Senado.

Ahora bien, las Asambleas de las Comunidades Autónomas también pueden tomar la iniciativa al respecto, procediendo en una de las dos siguientes formas:

- a) Solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de ley.
- b) Remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de ley, en cuyo caso delegarán ante esta Cámara hasta un máximo de tres miembros de la Asamblea para defender la proposición.

Por otra parte, por una ley orgánica se regulará en qué forma y con sujeción a qué requisitos podrá ejercerse la iniciativa popular para presentar proposiciones de ley. En cualquier caso, el mínimo de firmas acreditadas que se exigirá será 500.000 y quedarán excluidas de la iniciativa popular todas las materias que sean propias de leyes orgánicas, tributarias, de orden internacional o referentes a la prerrogativa de gracia (se reguló por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo). Los principales aspectos de la tramitación de un proyecto de ley son:

- a) Se aprueba, previamente, en Consejo de Ministros.
- b) Seguidamente se remite al Congreso, acompañado de una «Exposición de Motivos» de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el proyecto.
- c) La Mesa del Congreso ordenará su publicación y la apertura del plazo para presentar «enmiendas», disponiendo desde este momento, los Diputados y Grupos Parlamentarios, de un plazo de 15 días hábiles para presentar enmiendas a la totalidad del proyecto o parte del articulado; estas últimas podrán ser de supresión, modificación o adición.
- d) Se estudiará el proyecto en la correspondiente Comisión Permanente Legislativa y tendrán lugar los debates sobre las enmiendas.
- e) Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su Presidente lo remitirá, con los antecedentes del mismo y documentos producidos en la tramitación ante dicha Cámara, al Presidente del Senado. Este último, cumplidos los trámites reglamentarios, someterá el proyecto a la deliberación de la Cámara Alta (Congreso = «Cámara Baja»; Senado = «Cámara Alta»).
- f) En el plazo de dos meses, contados a partir del día en que se reciba el texto del proyecto, el Senado puede aprobarlo, oponer su veto o introducir enmiendas. El citado plazo puede reducirse a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.
- g) Si el Senado aprueba el proyecto, el Rey sancionará la ley en el plazo de 15 días, la promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- h) En caso de veto por el Senado, el proyecto de ley no podrá ser sometido a la sanción del Rey hasta que el Congreso levante el veto mediante la ratificación por «mayoría absoluta» del texto original.

Si no obtuviese tal mayoría se someterá de nuevo a votación una vez hayan transcurrido dos meses desde la interposición del veto. Si en esta votación el proyecto lograra «mayoría simple», quedará levantado el veto y aprobado; en caso contrario, el proyecto será rechazado.
- i) Si el Senado hubiera introducido enmiendas, el proyecto no se someterá al Rey para sanción hasta que el Congreso se pronuncie sobre las mismas, aceptándolas o no por «mayoría simple».

La tramitación de las proposiciones de ley se ajustará, en líneas generales, al siguiente procedimiento:

1. Se presentarán acompañadas de una «Exposición de Motivos» y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas.
2. Las proposiciones de ley dimanantes del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa:

- a) De un Diputado, con la firma de otros 14 miembros de la Cámara.
 - b) De un Grupo Parlamentario, con la sola firma de su portavoz.
3. Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley, así como su remisión al Gobierno, para que exponga su criterio al respecto.
 4. Si transcurridos 30 días el Gobierno no hubiera manifestado expresamente su disconformidad a la tramitación, la proposición será debatida en el Pleno del Congreso para su toma en consideración.
 5. Tomada en consideración, la Mesa del Congreso acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del plazo para presentación de enmiendas. No se admitirán enmiendas de totalidad de devolución.
 6. Se seguirá a continuación análogo proceso que en la tramitación de los proyectos de ley, correspondiendo su presentación ante el Pleno a uno de los proponentes o a un Diputado del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En cuanto a las proposiciones de ley cuya iniciativa haya sido tomada por el Senado, queremos resaltar dos particularidades:

1. No será preciso en el Congreso el trámite de «toma en consideración», por cuanto que se habrá cumplido ya previamente en el Senado.
2. En este supuesto sí que se admitirán enmiendas de totalidad de devolución cuando se tramite la proposición de ley en la Cámara Baja.

Las proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas, y las de iniciativa popular, serán examinadas por la Mesa del Congreso a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Si los cumplen, se tramitarán conforme al procedimiento antes detallado. El trámite de «toma en consideración» será definido por una Delegación de la Comunidad Autónoma que haya tomado la iniciativa.

Es muy importante destacar que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum deberá ser convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa autorización del Congreso de los Diputados.

Por último, añadir que, según el artículo 91 de la Constitución: «El Rey, en el plazo de 15 días, sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación», entrando en vigor conforme a lo establecido en el Código Civil.

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES.

2.1. CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA.

Con influencias directas de nuestra propia Constitución Española del año 1931 (que configuraba un órgano denominado «Tribunal de Garantías Constitucionales»), la actual Constitución de 1978 ins-

taura en España un órgano específico, dedicado al control de las cuestiones de constitucionalidad, es decir, a decidir sobre si una ley contradice, en cualquier aspecto, a la Norma Fundamental; ésta será su principal función, aunque, no obstante, ya veremos que se le reconocerán otras competencias, derivadas precisamente de su posición como intérprete supremo de la Constitución.

El sistema español de justicia constitucional (es decir, de control de la constitucionalidad de las leyes) se adscribe al modelo de la Constitución austriaca de 1920 (inspirada por Kelsen), en la que, para realizar esa función, se decidió crear un órgano específico (*ad hoc*), en lugar de atribuirse ese poder a los órganos jurisdiccionales ya existentes (como ocurre en los EE.UU.), o a algún órgano de carácter político (como es el caso de Francia). En este sentido, se puede decir que nuestro Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, ni tampoco es un órgano político. Es en realidad un órgano técnico, experto en temas constitucionales, que actúa como un órgano independiente, que se sitúa por encima de los demás órganos del Estado, y que está sometido única y exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica.

En cuanto a su regulación, debemos referirnos a la Constitución Española de 1978, que le dedica su Título IX (arts. 159 a 165), y a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, dictada en desarrollo de ese título constitucional (la LOTC).

2.1.1. Composición.

Según el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, a propuesta de los siguientes órganos:

- 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, por una mayoría de 3/5 de sus miembros.
- 4 a propuesta del Senado, también por mayoría de 3/5.
- 2 a propuesta del Gobierno.
- 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ, los propondrá por una mayoría de 3/5, el Pleno de dicho órgano).

Los miembros de este Tribunal deberán ser designados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional.

2.1.2. Mandato.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9 años y se renovarán por terceras partes cada tres.

2.1.3. Incompatibilidades.

La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el cargo de Defensor del Pueblo, Diputado o Senador y, en general, con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

2.1.4. Responsabilidad.

La responsabilidad civil o criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 26 de la LOTC).

2.1.5. Organización interna.

El artículo 160 de la Constitución Española destaca la necesidad de que, entre sus miembros, el Tribunal Constitucional designe a un Presidente, cuyo mandato será de 3 años. Pues bien, este Presidente será nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal, en Pleno, por un período de 3 años, renovables una sola vez (mandato de hasta 6 años).

De acuerdo con la LOTC, el Tribunal Constitucional funciona en Pleno o en dos Salas. Las Salas se componen de 6 Magistrados y distribuyen el trabajo constituyendo a su vez, Secciones. Para adoptar acuerdos tanto en el Pleno como en las Salas se requerirá la presencia de 2/3 de sus componentes, como mínimo.

El Pleno es el que asume la mayor parte de las competencias que corresponden al Tribunal, a excepción de los recursos de amparo, que son competencia de las Salas.

En caso de empate, el Presidente tiene atribuido voto de calidad.

2.2. COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El Tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y es competente para conocer (art. 161.1 de la CE):

- a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
- b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española.

Recordemos que el artículo 53.2 se refería a los derechos fundamentales, entendiendo como tales, el artículo 14, los artículos de la Sección 1.^a del Capítulo Segundo, y el artículo 30.2 sobre la objeción de conciencia.

- c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.
- d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución Española o las Leyes Orgánicas.

En este punto, habrá que consultar otros artículos de la Constitución Española y la propia LOTC.

Según el artículo 161.2 de la Constitución Española: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Asimismo, el artículo 163 de la Constitución Española recoge otra competencia, la llamada «Cuestión de inconstitucionalidad», consistente en lo siguiente: «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional». En este caso, los Jueces y Tribunales elevan una cuestión al Tribunal Constitucional con el objeto de que aquél les resuelva una duda sobre la interpretación o validez de un precepto legal, siendo el Tribunal Constitucional el único órgano competente para decidir sobre este asunto.

Además, en la LOTC se recogen otras dos competencias del Tribunal: el «control previo de tratados internacionales» y la resolución de «conflictos de competencias entre órganos constitucionales del Estado», que no estaban en la norma constitucional.

NOTA: el llamado «control previo» de acuerdos o tratados internacionales permite al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras dirigir una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez del texto definitivo de un tratado que aún esté pendiente de ser ratificado por España (por si contuviera alguna disposición contraria a la Constitución). La decisión del Tribunal Constitucional, como siempre sucede, será vinculante, así que, de ser negativa y determinar la inconstitucionalidad de algún precepto de ese tratado, habría que reformar la Constitución para poder firmarlo (como ocurrió con el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, contrario en uno de sus artículos al art. 13.2 de la CE). Esta función está recogida en el artículo 95 de la Constitución Española.

Por último, corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos planteados en defensa de la autonomía local, competencia que se le atribuye en virtud de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril.

• LEGITIMACIÓN.

Respecto a la legitimación o habilitación para recurrir ante el Tribunal Constitucional, el artículo 162 de la Constitución Española determina que estarán legitimados:

1. a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, un mínimo de 50 Diputados o de 50 Senadores, el Defensor del Pueblo y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, y en su caso, las Asambleas Legislativas de las mismas.

NOTA: en el caso de las Comunidades Autónomas, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que la ley impugnada «afecte a su propio ámbito de autonomía».

- b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la Ley Orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

El antecedente más claro de esta institución lo constituye la figura del «Ombudsman» del Derecho escandinavo, que nació en Suecia, en el siglo XIX, como protector de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los abusos de los Poderes Públicos, y que se ha generalizado rápidamente, con diversidad de formas y denominaciones, por todos los países de corte democrático.

En España se regula por primera vez en el artículo 54 de la Constitución de 1978, que lo define como «el Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto se le habilita para supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes».

De esta definición se desprende que el Defensor es un órgano que actúa en cumplimiento de una misión que se atribuye al Parlamento (y de ahí su denominación de «comisionado de las Cortes»), aunque para desempeñarla va a ser absolutamente independiente, no recibiendo instrucciones previas de ninguna Autoridad y actuando siempre según su criterio (es lo que se conoce como autonomía funcional del Defensor del Pueblo).

También le define el hecho de ser un cauce institucional expresamente dedicado a proteger y garantizar el libre ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y libertades (regulados en el Título I de la CE), hasta el punto de que puede controlar a la Administración Pública, que es uno de los Poderes Públicos que con mayor frecuencia vulnera la esfera de libertad privada de los particulares.

En cuanto a su regulación, la Constitución Española exigía que la misma se efectuara mediante una Ley Orgánica. Así, en el año 1981 se dictó la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que ha sido modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo. La modificación que ha operado esta última disposición legal ha consistido simplemente en la creación de una Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en sustitución de las dos Comisiones parlamentarias que anteriormente existían.

Asimismo, el Defensor del Pueblo está regulado en un Reglamento adoptado por las Mesas del Congreso y del Senado reunidas en sesión conjunta, el 6 de abril de 1983, conocido como «Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo», modificado en 1992, y que tiene rango equivalente a una ley ordinaria.

3.1. DESIGNACIÓN.

El Defensor del Pueblo es designado por las Cortes para un período de cinco años a propuesta de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

El procedimiento de designación es el siguiente:

- Puede ser candidato cualquier español, mayor de edad que se encuentre en el pleno uso y disfrute de sus derechos civiles y políticos.
- El candidato deberá recibir la aprobación del Congreso por mayoría de 3/5 partes de los miembros de la Cámara, y ser ratificado 20 días después por idéntica mayoría, en el Senado. En caso de no obtenerse tales mayorías, se propondrá un nuevo candidato en el plazo de un mes, al que le bastará con obtener una mayoría de 3/5 en el Congreso y la mayoría absoluta del Senado, para ser designado.
- Designado el Defensor del Pueblo, se reunirá de nuevo la Comisión Mixta para otorgar su conformidad al nombramiento de los Adjuntos que le sean propuestos por aquél.

3.2. CESE.

Puede cesar por alguna de las siguientes causas: por renuncia, por expiración del plazo de su mandato (salvo renovación), por muerte o incapacidad sobrevenida, por notoria negligencia en el

cumplimiento del cargo y por condena por sentencia firme debida a comisión de un delito doloso (es decir, intencionado). En los tres primeros casos, la vacante será declarada por el Presidente del Congreso y se procederá al nombramiento de un nuevo Defensor. En cambio, en los demás casos la vacante será objeto de debate en las Cámaras, debiendo ser aprobado el cese por las 3/5 partes de cada Cámara y previa audiencia del interesado.

Mientras no se proceda al nombramiento del nuevo Defensor, desempeñarán sus funciones interinamente los Adjuntos, según su orden (Adjunto Primero, Adjunto Segundo).

A) Estatuto del Defensor del Pueblo:

Goza de inviolabilidad, es decir, no puede ser detenido, perseguido, multado o sancionado por las opiniones que manifieste en ejercicio de sus funciones, y de inmunidad, de manera que no puede ser detenido ni retenido, salvo en caso de flagrante delito. No necesita suplicatorio para ser inculcado o procesado, pero goza de un fuero especial, ya que sólo el Tribunal Supremo puede encausarle y juzgarle.

Su labor es totalmente incompatible con cualquier cargo o función pública y con toda actividad privada, mercantil, laboral o profesional.

Los Adjuntos del Defensor del Pueblo le sustituirán en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán las funciones que aquél les delegue, siéndoles de aplicación todas las prerrogativas e incompatibilidades propias del estatus jurídico del Defensor.

B) Competencias:

El Defensor puede iniciar y proseguir cualquier investigación encaminada a esclarecer actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a fin de evitar y controlar las desviaciones de poder. Su investigación puede extenderse a la actividad de Ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas (en sus niveles estatal, autonómico o local). Tendrá acceso a todos los locales de la Administración y a todo tipo de documentos, incluso los declarados secretos (y salvo, en este último caso, que lo deniegue el Consejo de Ministros). Si llegara a su conocimiento algún hecho delictivo, su deber es ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Cuando actúa a petición de parte, lo hace a consecuencia de una reclamación o «queja» presentada por alguna persona física o jurídica. Los requisitos de la «queja» son sencillos:

- Puede presentarla cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, estado civil o capacidad. En este sentido, no constituye impedimento el encontrarse internado en un centro penitenciario o sanitario. No se requiere representante ni abogado, y el procedimiento es gratuito para el interesado.
- Se presentará en cualquier tipo de escrito (papel común), indicando el nombre, apellidos, domicilio y firma del reclamante. Asimismo, deben indicarse razonadamente los motivos de la reclamación (cualquier actuación abusiva o lesiva de derechos de la Administración).
- No existe plazo concreto para acudir al Defensor del Pueblo, pero sí es cierto que no se admitirán a trámite quejas presentadas un año después de que el reclamante haya tenido conocimiento del hecho que es objeto de su queja.

De toda queja el Defensor acusará recibo, pero decidirá discrecionalmente, según su criterio, si tramita o no la misma. Si decide rechazarla, lo hará en escrito motivado dirigido al interesado.

El Defensor no podrá investigar quejas referidas a hechos que estén pendientes de una resolución judicial, y paralizará la investigación si el interesado interpone cualquier recurso judicial o administrativo. Hay que señalar que el Defensor no es una instancia judicial, y no tiene poder para anular o modificar las resoluciones de los órganos administrativos. Es más, la presentación de una queja ante el Defensor no interrumpe los plazos normales que concede el Ordenamiento Jurídico para interponer los habituales recursos judiciales o administrativos. De manera que es aconsejable agotar primeramente la vía legal normal antes de ir al Defensor del Pueblo y no al contrario.

Las resoluciones de este órgano pueden suponer recomendaciones, sugerencias o advertencias a los órganos administrativos, que de no seguirse, pueden implicar responsabilidades (incluso, delito de desobediencia). Lo importante es que, en cualquier caso, si así lo estima conveniente, el Defensor puede interponer acciones judiciales, e incluso, puede interponer tanto el recurso de inconstitucionalidad como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Debe remitir a las Cortes un informe anual, en el que resumirá las quejas recibidas y el seguimiento de las mismas.

Si deseara acudir a las Cortes por cualquier circunstancia y éstas no se hallaran reunidas, podrá acudir a las Diputaciones Permanentes de ambas Cámaras.

En los estados de excepción o sitio, no se interrumpe su actividad, sin perjuicio de que no pueda investigar violaciones de derechos que pudieran encontrarse suspendidos, según el artículo 55 de la Constitución.

• • •